**Ejemplo de Iniciativa Ciudadana**

Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2o., fracción I, incisos D), numerales 1 y 2, y H), numerales 1 y 2, y 2o.-A., fracciones I a III; y se derogan el párrafo tercero del inciso D) de la fracción I y el cuarto párrafo del inciso H) de la fracción I del artículo 2o., y el párrafo tercero del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

**Ciudadanos Presidente y Secretario de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión**

**Presentes**

Los que suscriben, ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, y los firmantes que aparecen en los formatos que se anexan, ciudadanos mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 35 y fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 78, 182 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción I, incisos d), numerales 1 y 2, y h), numerales 1 y 2; y artículos 2o.-A, fracciones I, II y III; y se derogan el párrafo tercero del inciso d) de la fracción I y el cuarto párrafo del inciso h) de la fracción I del artículo 2; y el párrafo tercero del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con arreglo a la siguiente

**Fundamentación y objeto**

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción VII, establece que es un derecho de los ciudadanos “iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”. Además, hemos recabado las firmas de ciudadanos, como dispone la fracción IV del artículo 71 de nuestra Carta Magna, que establece cuando menos el 0.13% del listado nominal, mismo que exhibimos en esta iniciativa de ley. Por lo anterior, nos estamos presentando ante este soberano Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 77, 78, 182 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. En este escrito nombramos como nuestros representantes para oír y recibir toda clase de notificaciones, a los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda, con domicilio en la calle Rodolfo Acedo número 1231, fraccionamiento Chapultepec del Río, Culiacán, Sinaloa, código postal 80040; y Víctor Antonio Corrales Burgueño, con domicilio en el boulevard Rotarismo 1620-5, privada Pueblo Bonito, colonia Desarrollo Urbano 3 Ríos, Culiacán Sinaloa, código postal 80020.

III. Que es función de esta Cámara de Diputados de la honorable Sexagésima Cuarta Legislatura revisar el orden jurídico del país, por lo que en atención a ello nos estamos presentando con este escrito, y

IV. Que el **objeto** del presente documento se orienta a reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de eliminar los montos al cobro de dichos impuestos en gasolina, diésel y gas de uso doméstico.

Que en tal virtud, resulta necesario proponer esta iniciativa y someter a su investidura la siguiente:

**Exposición de Motivos**

La correlación entre democracia y liberalismo como elementos fundamentales de los estados occidentales modernos, pone de relieve la función del Estado en el logro de la democracia y esto a su vez, nos lleva a plantear cuál es el papel de la ciudadanía en el estado democrático de derecho. El liberalismo es una corriente ideológica cuyos principales exponentes son Locke, Montesquieu, Kant, Adam Smith, Humboldt, Constant, John Stuart Mill y Tocqueville, cuyas premisas fundamentales son la economía de mercado y el Estado mínimo o liberal.

Las bases fundamentales del modelo de Estado liberal son el reconocimiento de las libertades de las personas, el monopolio de la fuerza legítima con la que asegura la libertad, el reconocimiento de los derechos fundamentales, la división de poderes, el imperio de la ley y la instauración de la ciudadanía como cauce de participación política; de tal forma que el papel del Estado es participar activamente en la protección de todos los derechos fundamentales de las personas. Estas obligaciones tienen como consecuencia la necesidad de que el mismo se allegue de recursos para el desarrollo de sus actividades, así como para el sostenimiento de la estructura burocrática necesaria para administrar el ejercicio del gobierno y hacer frente a sus obligaciones como garante.

Los impuestos son la fuente de ingresos públicos más importante, en el ámbito teórico, se les definen de diferentes maneras, por ejemplo, Vitti de Marco plantea que son una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales. Mientras que para José Álvarez de Cienfuegos representan una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte. Luigi Cossa los concibe como una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales.

Los teóricos en la materia son coincidentes en que los impuestos son coercitivos, limitan el poder de compra del consumidor, se destinan a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas y gastos generales del Estado. Estos gravámenes representan un instrumento para lograr la igualdad sustantiva que implica el goce de todos los derechos para todas las personas, de distribuir la riqueza y de proporcionar los bienes que serían de difícil obtención de forma individual, tales como la protección de la propiedad y el ejercicio de la libertad. Si bien el Estado tiene la obligación de hacer cumplir los derechos fundamentales de forma intensiva y extensiva en virtud de que los poderes públicos son la representación de la soberanía del pueblo, la ciudadanía también está obligada a contribuir para hacer efectiva la acción del Estado.

En México la imposición de contribuciones y la percepción de su producto, tiene su fundamento en el fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como obligación para los mexicanos “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Los principios que rigen a los impuestos en nuestro país son los de legalidad, es decir, deben estar previstos en las leyes como se establece en los artículos 31, fracción IV, y 73, fracción VII, de nuestra Carta Magna. Otro principio es la obligatoriedad, en virtud de que se trata de una obligación de los mexicanos conforme al anteriormente citado artículo 31, fracción IV, constitucional. Por último, la proporcionalidad y la equidad, figuran como principios que implican un tratamiento igual a las personas en la misma situación, procurando que el impacto de la contribución sea el mismo, dependiendo de la capacidad contributiva de cada persona.

Conforme a lo establecido en los artículos 73, fracción VII y 74, fracción IV, de la Constitución General de la República, los impuestos deben destinarse a satisfacer el gasto público previsto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación que para cada ejercicio fiscal expida la Cámara de Diputados.

A nivel de ley secundaria, el principio de legalidad exige que todos los impuestos se establezcan en ley, en ese sentido, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 5, establece que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Con base en ello, la normatividad tributaria debe advertir quiénes se encuentran sujetos al pago de impuestos, cuál es el objeto de gravamen, sobre qué base se determinará el impuesto y la tasa aplicable o la tarifa, según sea el caso. Estos elementos son indispensables para que la norma sea considerada constitucional.

Los principales impuestos en México son el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), entre otros. El IEPS, que es uno de los gravámenes objeto de esta iniciativa, es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Éstos por lo general, causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. Al igual que el IVA, es un impuesto que puede ser trasladado.

El IEPS entró en vigor en México en 1980 y se rige por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Los sujetos del pago de este gravamen son las personas físicas y morales que realizan la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes, así como la prestación de los servicios señalados en su ley. El objeto de este impuesto es gravar la enajenación e importación de bebidas alcohólicas, cerveza, alcoholes, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, tabacos labrados, gasolinas, diésel, bebidas energizantes, bebidas con azúcares añadidos, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico como botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, y helados, nieves y paletas de hielo. Así como gravar los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de estos bienes. También se gravan los servicios de juegos de apuestas y sorteos, y los de telecomunicaciones.

La base del IEPS es el valor del bien que se enajena o importa o el valor del servicio que se presta. Por lo general, la base es la contraprestación, salvo en el caso de los cigarros, cuya base es el precio de venta al detallista, es decir, al comerciante que vende al por menor. También puede constituir la base, en su caso, la cantidad de litros y la graduación alcohólica.

La tasa o cuota mediante la que se grava este impuesto varía en función del bien o del servicio, estas cuotas no son estáticas, sino que se actualizan de manera anual mediante acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizando un factor de actualización que se obtiene dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17 A. El IEPS se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto, excepto en caso de importación de bienes, que se paga conjuntamente con el impuesto general de importación.

En nuestro país la inflación se mide mediante el INPC y sus componentes (INPC:

subyacente, no subyacente, mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo, y mercancías y servicios de uso intermedio), es el instrumento utilizado para obtener el factor de actualización del IEPS, este indicador tiene por objeto medir la evolución en el tiempo del nivel general de precios de los bienes y servicios que consumen los hogares urbanos del país y se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior en caso que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día 25 se publica el cálculo de la primera quincena del mes, el día 10 se difunde el que corresponde al dato mensual y a la segunda quincena del mes anterior. La cobertura de este índice es de carácter nacional y se integra con datos obtenidos de 46 ciudades agrupadas en siete regiones geográficas (Frontera Norte, Noroeste, Noreste, Centro Norte, Centro Sur, Sur y Área Metropolitana de la Ciudad de México), y son clasificadas en tres tamaños de localidad (pequeña, mediana y grande).

El proceso de cálculo del INPC se realiza en siete etapas, iniciando con la selección de fuentes de información, en la que para garantizar la representatividad de los precios que se utilizan en el cálculo de los índices, en primera instancia se lleva a cabo una selección de las fuentes de información por parte de los supervisores en coordinación con los investigadores de precios, dichas fuentes son seleccionadas de directorios especializados. La segunda etapa es la de cotización de productos específicos, en la que los investigadores de precios distribuidos en todo el país dan seguimiento recurrente a los productos específicos más representativos, la selección de estos productos específicos se realiza con la ayuda de la fuente de información.

La tercera etapa del proceso es la captura y envío, durante la que una vez que se dispone de todas las cotizaciones a nivel nacional, éstas son concentradas en la oficina central para realizar el proceso de cálculo. Posteriormente se ejecuta la etapa de análisis y crítica de la información, en la que una vez concentrada la información en la Ciudad de México, los precios que se recaban pasan por un proceso de revisión por los supervisores y, si es necesario, de verificación de parte de los investigadores de precios.

La quinta etapa es la de cálculo de los índices, durante la que una vez concluidos y aprobados los procesos anteriores se procede al cálculo, para lo cual se utiliza el método de ponderaciones fijas de Laspeyres, para posteriormente entrar a la etapa de revisión y validación de los resultados, durante la que antes de ser liberados los resultados se realizan reuniones de trabajo para verificar la consistencia de los mismos. Finalmente en la etapa de publicación se presenta un comunicado de prensa en el que se resume el comportamiento de los índices de precios, se divulga en la página *web* y para el caso del INPC se publican en el Diario Oficial de la Federación.

La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Los determinantes de la inflación se pueden clasificar de acuerdo al horizonte de tiempo que éstos tardan en impactar a la inflación, de esta manera, existen determinantes de largo plazo, entre los que destacan el exceso de dinero, el déficit fiscal, las políticas inconsistentes; así mismo existen determinantes de corto plazo tales como la contracción de la oferta agregada, el incremento de la demanda agregada, la tasa de interés y la política de inflación creíble. El factor de actualización del IEPS tiene como base entonces la inflación.

No obstante la gran conquista en contra de la arbitrariedad que significó el sometimiento de todas las personas al régimen constitucional y legal, este no suprime el precepto democrático de que el pueblo es el depositario de la soberanía tal y como se establece en el artículo 39 de nuestra Carta Magna. En este sentido, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, por lo que, con toda la responsabilidad que como legisladores tenemos con la estabilidad económica del país y con una visión holística de los múltiples factores que inciden en su comportamiento tanto en el contexto nacional, como en el internacional, es preciso tomar conciencia de las implicaciones que las medidas liberalizadoras de la economía tienen para la población y si bien, no atentar contra los principios del Estado Liberal y legislar para establecer modelos de arduo control estatal de la economía, si permitir que la población logre ajustar su economía a este proceso, así como el país, dando con ello un voto de confianza a la premisa de la reforma energética de que eventualmente la economía alcanzará un punto de equilibrio que tendrá como resultado un precio estable del gas, las gasolinas y el diésel, así como una eventual disminución del mismo.

Aumentar el precio de la gasolina tiene un impacto directo en la inflación, pues este producto influye en todas las actividades económicas del país, por lo que mantener vigente las tarifas actuales de este gravamen para las gasolinas, el diésel y el gas, representa un alto costo social en la búsqueda de allegar al Estado de mayores recursos, pues los incrementos anuales con base en el comportamiento de la inflación, afectan la economía de toda la población, iniciando por quienes dependen del uso de combustibles en su actividad diaria, pero además, de quienes menos tienen, al tener un alcance sistemático en el alza de precios de los productos debido al incremento del costo de los energéticos, por lo que se considera como una medida necesaria, eliminar las tarifas establecidas en la Ley del IEPS.

Es cierto que con esta medida que en la presente iniciativa se propone, se afectarán las finanzas públicas de las entidades federativas debido a la disminución de las participaciones federales, sin embargo no es posible sostener un gobierno federal y gobiernos estatales ricos, gobernando a un pueblo pobre, por lo que, esta iniciativa se presenta con absoluta responsabilidad política y social, apostándole en todo momento al desarrollo sostenido del país, bajo la premisa de que el desarrollo social no es una meta a la cual hay que aspirar y llegar, sino un proceso permanente de mejora de la calidad de vida de las personas, como seres individuales y de la sociedad como ente colectivo.

Se puede decir que el sistema tributario de los últimos años ha sido regresivo, ya que se ha dedicado a dar impulso a los impuestos sobre el consumo, los cuales resultan más pesados para las personas de bajos y medianos recursos, de igual forma éste sistema se orienta a captar más los ingresos laborales que las ganancias de capital, lo que genera que las personas que se encuentran en el nivel inferior de la de distribución de ingresos se vean afectados e incluso perjudicados en su nivel de vida. Organismos como la Cepal exhortan a que se generen reformas en los códigos tributarios que trasladen la carga fiscal desde el trabajo y consumo hacia el capital y la riqueza, a través de impuestos que graven transacciones financieras, la riqueza, las herencias y las ganancias de capital por poner un ejemplo.

Es preciso además considerar que los estados fronterizos se encuentran en proceso de estabilización después de la homologación del IVA en todo el país, de hecho, el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo elevó el 7 de febrero de 2017 a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el objeto de reducir las cuotas por la enajenación o importación de combustibles. Por su parte, el Honorable Congreso del Estado de Baja California, elevó el 7 de marzo de 2017 el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que propone eliminar el IEPS a los combustibles automotrices. Mientras que el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua elevó el 18 de abril de 2017 el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d), fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que propone aplicar una cuota de 0.00 pesos por litro a los combustibles automotrices fósiles y no fósiles.

Además de los estados fronterizos antes mencionados, el honorable Congreso de Jalisco presentó el 17 de enero de 2017 el proyecto de decreto que deroga el inciso d), del artículo 2o., el artículo 2o.-A, y la fracción II del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que propone eliminar el impuesto especial en materia de gasolinas y diésel y la participación de la recaudación a los estados y municipios. Todas las iniciativas elevadas por congresos locales buscando reformar la ley que se busca modificar mediante la presente iniciativa fueron desechadas, con fecha 31 octubre del mismo año en que fueron presentadas.

Con base en lo anterior, al eliminarse las tarifas aplicables al combustible automotriz del IEPS, se verá reducido de manera significativa el costo de la gasolina y diésel, beneficiando con ello la economía de las familias del país y dando un respiro a los sectores productivos al derogar el factor de actualización a partir del ejercicio fiscal 2019, en el caso de la eventual aprobación de la presente propuesta.

Ante los motivos expuestos y los contenidos argumentados y fundamentados, hago llegar a los integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de

**Decreto**

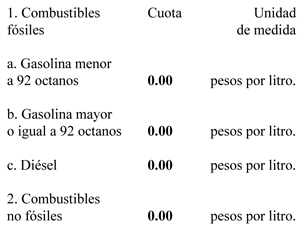
**Artículo Único.** Se **reforman** los artículos 2o., fracción I, incisos D), numerales 1 y 2, y H), numerales 1 y 2; y artículos 2o.-A, fracciones I, II y III; y se **derogan** el párrafo tercero del inciso D) de la fracción I y el cuarto párrafo del inciso H) de la fracción I del artículo 2; y el párrafo tercero del artículo 2o.-A de la **Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,** para quedar como sigue:

**Artículo 2.** ...

I. ...

A) a C) ...

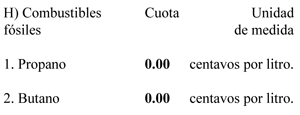
D) ...



...

**Se deroga.**

E) a G) ...



3 a 10 ...

...

...

**Se deroga.**

I) a J) ....

II a III. ...

**Artículo 2o.-A.** ...

I. Gasolina menor a 92 octanos **00.00** centavos por litro.

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos **00.00** centavos por litro.

III. Diésel **00.00** centavos por litro.

...

**Se deroga.**

...

...

...

...

...

**Artículos Transitorios**

**Artículo Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018.

**Representantes de los ciudadanos firmantes**

Ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda (rúbrica)

Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño (rúbrica)